

DEONTOLOGÍA DEL AUDITOR INFORMÁTICO Y CÓDIGOS ÉTICOS

Jorge Páez Mañá

7.1. INTRODUCCIÓN

En el denominado “nuevo orden mundial”, caracterizado por unas directrices económicas, en permanente cambio, estrechamente vinculadas a los continuos avances tecnológicos, tratar temas relacionados con la deontología, la ética o la moral, implica necesariamente hacer un alto en el camino, dejar al lado las múltiples y a menudo absurdas motivaciones económico-profesionales y, sin las premuras derivadas del ritmo de vida que aparentemente esta sociedad impone, reposadamente, con sosiego, adentrarse en el mundo interno subjetivo de la conciencia para observar la concepción humanística que, como personas, ésta pone de manifiesto como máximo exponente de la propia y auténtica identidad.

Una vez realizada dicha prospección interna se estará en condiciones de, dada la intrínseca naturaleza social del hombre, poder atisbar en el mundo externo, donde éste realiza su convivencia, observando los valores morales imperantes, representativos del grado de evolución social de la comunidad que los ha asumido como propios.

La primera observación debería inducir a reflexionar sobre los aspectos más íntimos ligados a la vida interior de cada cual (creencias, sentimientos, finalidad teleológica, proyecto de vida, etc.), que globalmente considerados han de poner de manifiesto la propia e intrínseca realidad individualizada, es decir, la genuina identidad personal.

Esta identidad, inherente a toda persona, debería estar sustentada en los **principios** morales socialmente acusados y preservados a lo largo de los tiempos, principios que, provenientes del espíritu y susceptibles, en virtud del libre albedrío, de servir o no de guía a la conducta exteriormente manifestada de los individuos, permiten diferenciar a éstos del resto de seres vivos, que carecen de esa libertad de conciencia.

Si bien la moral individual está enraizada en forma única y personalizada, la necesidad de relacionarse y convivir unos individuos con otros en comunidad exige una cierta adaptación de las diferentes concepciones morales individuales a unas determinadas normas éticas, socialmente asumidas por los miembros integrantes de la comunidad, que facilitan una convivencia pacífica y enriquecedora común.

Estas normas sociales, reflejo de la idiosincrasia de las diferentes comunidades, ponen de manifiesto los usos y costumbres que regulan mediáticamente las relaciones entre las personas y grupos que las conforman, considerándose, sin precisar su normalización positiva, implícitamente aceptadas por todos, y representativas de los principios sociales básicos reguladores de dichas relaciones (buena fe, cortesía, respeto, solidaridad, etc.).

Conviene, en este punto de la reflexión, resaltar el hecho de que los principios morales, en contraposición con los preceptos normativos materiales, deben ser asumidos individual y colectivamente como propios en forma voluntaria y con independencia de que se haya, o no, establecido expresamente la obligación material de cumplirlos, ayudando a configurar una concepción ética interna de lo que está bien y lo que está mal que constituye la parte fundamental del patrimonio espiritual de las personas y grupos integrantes de la sociedad que los aceptan como suyos.

Es precisamente esa característica de voluntariedad, de íntimo convencimiento de su idoneidad, generada por una previa sensibilización personal y colectiva sobre su validez para el cumplimiento de los fines teleológicos de los individuos y sociedades que los asumen, lo que configura a los principios morales como fuente primordial del derecho positivo y eje genuino y auténtico de la evolución social de la humanidad.

Junto a estas normas éticas inmateriales, coexisten otras positivas que regulan, en forma coactiva, los deberes y derechos de los ciudadanos integrados en cada colectividad. Estas normas positivas, elaboradas en virtud del "contrato social" que los ciudadanos implícitamente suscriben con sus gobernantes, se establecen como reguladores de aquellos aspectos que se considera deben estar clara y expresamente estipulados, a fin de determinar los principios legales que, de obligado cumplimiento, regulan los deberes y derechos que rigen en la sociedad y que, por ende, pueden ser imperativamente exigibles a cada uno de sus miembros.

La complejidad de las relaciones colectivas, la protección de los más débiles contra los abusos de los más fuertes y la necesidad de establecer unas normas de comportamiento precisas que, conocidas por todos, sirvan de cauce idóneo para la solución efectiva de los posibles conflictos personales que puedan generarse en el seno de la comunidad, ha fundamentado el establecimiento y legitimidad de dichos principios legales, si bien se exige de estos que estén imbuidos por los principios morales, colectivamente asumidos, y que respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos como conformadores del derecho mundial.

Ante esta dicotomía de normas morales y materiales, los códigos deontológicos representan un cierto punto de acercamiento y encuentro entre ambas.

Estos códigos toman, de las normas morales, su faceta intrínsecamente ética, y reflejan el sentir mayoritario de los profesionales a los que van dirigidos, de lo que se considera como un adecuado comportamiento ético-profesional, sirviendo de reprobación moral de aquellas conductas contrarias a lo regulado en los mismos.

Debe tenerse en cuenta que todo código deontológico, entendido como conjunto de preceptos que establecen los deberes exigibles a aquellos profesionales que ejerciten una determinada actividad, tiene como finalidad teleológico la de incidir en sus comportamientos profesionales estimulando que éstos se ajusten a determinados principios morales que deben servirles de guía.

El hecho de que los códigos deontológicos deban ser elaborados por los propios profesionales en el marco de los colegios, asociaciones o agrupaciones que los representen, y asumidos en forma generalizada como forma de autorregulación ética de su actividad, permite que éstos incidan en algunos aspectos –inaplicables al resto de ciudadanos, ya que fuera de su específico campo de aplicación serían ineficaces e inoperantes–, sobre los que, en beneficio de la propia comunidad, establecen unas determinadas pautas de conducta, a fin de evitar conculcar, por simple desconocimiento o apatía ético-intelectual, derechos de terceras personas.

Los principios contenidos en los códigos deontológicos exigen asimismo, por su especificidad moral, que los propios profesionales coadyuven a su difusión mostrando un comportamiento conforme a los mismos como medio de sensibilización y mejora del prestigio y calidad de su oficio.

A este respecto los auditores han de ser conscientes, dada su alta especialización en un campo habitualmente desconocido por amplios sectores sociales, de la obligación que moralmente deben asumir respecto a advertir a la sociedad sobre los riesgos y dependencias que la informática puede provocar y sobre las medidas que deben adoptarse para prevenirlos, debiendo servir los códigos deontológicos de

ejemplo y cauce idóneo para transmitir, al resto de la sociedad, sus singulares y específicas percepciones, inquietudes y autolimitaciones.

Debe tenerse muy presente que si bien los sistemas informáticos, sometidos a auditorías, son un mero instrumento al servicio de la política empresarial, el estudio de su estructura, y aún más el acceso a la información almacenada en su seno, permite a los auditores obtener una visión y conocimiento tanto de la situación global como de determinadas facetas de la empresa o sus empleados, en ciertos casos superior a las de los propios auditados, razón por la cual el sometimiento de los primeros a unos, en apariencia innecesariamente rígidos y detallados principios deontológicos propios de su oficio, resulta de obligada instauración en favor de los segundos, aun cuando estos últimos desconozcan tan siquiera la existencia de los mismos y se sorprendan de determinadas actitudes de los auditores acordes con ellos.

Los códigos deontológicos toman asimismo, de las normas materiales, las facetas reguladores de determinados comportamientos interpersonales como salvaguardia de derechos individuales y colectivos susceptibles de protección institucional, sirviendo de cauce para coartar, en los ámbitos profesionales correspondientes, aquellas conductas contrarias a lo regulado en sus preceptos mediante la imposición de sanciones, contempladas éstas desde una perspectiva disciplinaria meramente profesional.

Conviene en todo caso matizar el alcance coercitivo de las normas deontológicas.

Ya se ha indicado anteriormente que toda persona debe ceñir su conducta a sus propias normas morales internas, consustanciales a su identidad, y aceptar la imposición de unas normas coactivas externas, impuestas como medio de protección de la sociedad en la que se encuentra integrada.

Sin embargo, estas últimas normas no pueden regular, con total exhaustividad, el complejo mundo de relaciones interpersonales y aún menos profundizar en aspectos puntuales que sólo afectan a un reducido grupo de individuos o actividades, so pena de constituir un corpus jurídico conformado por un número tan elevado de preceptos que, por su gigantismo, resultaría del todo punto inasumible por la sociedad y, por ende, inútil e inaplicable.

Los códigos deontológicos, por el contrario, al restringir su ámbito subjetivo a determinados grupos de personas, los profesionales de áreas concretas, y acotar su ámbito temático a sus específicos campos de actividad, permiten, sin causar perjuicio ni discriminación al resto de integrantes de la comunidad, establecer, para el ejercicio de determinadas actividades, unos mínimos estándares de comportamiento ético y técnico configuradores, a tenor del estado de la ciencia, de la moral colectiva del grupo al que van dirigidos.

Hay que tener presente que, mediante el ejercicio profesional, se pone de manifiesto una de las facetas de la personalidad que más incide en la valoración social de la actividad desarrollada por las personas a través de la realización de su trabajo.

Ciertamente existe un numeroso conjunto de preceptos incluidos en normas materiales provenientes del Derecho Constitucional, Civil, Laboral, Mercantil, etc., que regulan una gran variedad de actos relacionados con la actividad profesional, pero más allá de dichos preceptos, y como fundamento de los mismos, debe existir una "moral profesional" que sirva de guía para determinar cuándo un determinado comportamiento profesional es bueno o malo (moralmente admisible y beneficioso o moralmente inadmisible y perjudicial).

La coercibilidad de los códigos deontológicos debe, por tanto, constreñirse a la imposición de medidas disciplinarias, correctoras de comportamientos contrarios a lo estipulado en los mismos, que pongan de manifiesto el rechazo, por el colectivo profesional correspondiente, de aquellas conductas profesionales indignas.

Estas medidas suelen estar constituidas por apercibimientos, reprensiones públicas o privadas y, en los casos de grave o reiterado incumplimiento, exclusiones temporales o definitivas del infractor, del grupo profesional que las ha asumido como propias.

Con esta perspectiva se hace preciso, en el momento actual, ir planteando, de forma crítica, la necesidad de sensibilizar a los auditores informáticos, integrados en un sector profesional dotado de una cierta autonomía y con unas características muy particulares, de la conveniencia de reflexionar sobre la dualidad de facetas integradoras de su comportamiento profesional (comportamiento técnico cualificado y comportamiento ético) a fin de eliminar el error de creer que su actividad debe valorarse únicamente en función de unos mínimos estándares técnicos de calidad y fiabilidad obviando los condicionantes éticos que, en caso de conflicto con condicionantes técnicos o de cualquier otra índole (científicos, económicos, promocionales, empresariales, etc.), deben ser considerados como prevalentes.

Antes de entrar en una aproximación de los diferentes principios deontológicos que normalmente se asocian a la actividad de los auditores, no está de más recalcar que en tanto en cuanto éstos no estén plenamente asumidos, como configuradores de la dimensión ética de su profesión, sería preferible apelar a los comportamientos morales individuales, como medio de ir incidiendo en la sedimentación de concepciones humanísticas en el entorno profesional en que se desenvuelven, a pretender imponer unilateralmente, a través de agrupaciones, sociedades o colegios profesionales, dichos principios.

7.2. PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS APLICABLES A LOS AUDITORES INFORMÁTICOS

Los principios deontológicos aplicables a los auditores deben necesariamente estar en consonancia con los del resto de profesionales y especialmente con los de aquellos cuya actividad presente mayores concomitancias con la de la auditoría, razón por la cual, en equivalencia con los principios deontológicos adoptados por diferentes colegios y asociaciones profesionales de nuestro entorno socio-cultural, y sin ánimo de exhaustividad, se pueden indicar como básicos, en un orden meramente alfabético y ajeno, por tanto, a cualquier ponderación de importancia, los siguientes:

7.2.1. Principio de beneficio del auditado

El auditor deberá ver cómo se puede conseguir la máxima eficacia y rentabilidad de los medios informáticos de la empresa auditada, estando obligado a presentar recomendaciones acerca del reforzamiento del sistema y el estudio de las soluciones más idóneas según los problemas detectados en el sistema informático de esta última, siempre y cuando las soluciones que se adopten no violen la ley ni los principios éticos de las normas deontológicas.

En ningún caso está justificado que realice su trabajo el prisma del propio beneficio, sino que por el contrario su actividad debe estar en todo momento orientada a lograr el máximo provecho de su cliente.

Cualquier actitud que anteponga intereses personales del auditor a los del auditado deberá considerarse como no ética, ya que limitará necesariamente la aptitud del primero para prestar al segundo toda la ayuda que, a tenor de su capacitación, puede y debe aportarle.

Para garantizar tanto el beneficio del auditado como la necesaria independencia del auditor, este último deberá evitar estar ligado en cualquier forma, a intereses de determinadas marcas, productos o equipos compatibles con los de su cliente, debiendo eludir hacer comparaciones, entre el sistema o equipos del auditado con los de otros fabricantes, cuando las mismas sólo se realicen con la intención de influir en las decisiones de su cliente y provocar un cambio hacia esos otros sistemas o productos bien por intereses económicos particulares del auditor o bien por el mayor conocimiento que tenga de ellos o desee tener.

La adaptación del auditor al sistema del auditado debe implicar una cierta simbiosis con el mismo, a fin de adquirir un conocimiento pormenorizado de sus características intrínsecas.

A partir de la adquisición de dicho conocimiento, y con el grado de independencia indicado anteriormente, estará en condiciones de indicar, si lo considerase pertinente en forma globalizada o en forma particularizada, las ventajas y desventajas que el sistema ofrece respecto a otros sistemas o marcas, debiendo obtener de dicha comparación una serie de conclusiones que permitan mejorar la calidad y prestaciones del sistema auditado.

Únicamente en los casos en que el auditor dedujese la imposibilidad de que el sistema pudiera acomodarse a las exigencias propias de su cometido o considerase excesivamente onerosos los cambios a introducir para obtener una suficiente fiabilidad a corto y medio plazo, éste podría proponer un cambio cualitativamente significativo de determinados elementos o del propio sistema informático globalmente contemplado.

Una vez estudiado el sistema informático a auditar, el auditor deberá establecer los requisitos mínimos, aconsejables y óptimos para su adecuación a la finalidad para la que ha sido diseñado, determinando en cada caso su adaptabilidad, fiabilidad, limitaciones, posibles mejoras y costes de las mismas, con objeto de presentar al auditado una serie de opciones de actuación en función de dichos parámetros a fin de que éste pueda valorar las relaciones coste-eficacia-calidad-adaptabilidad de las diferentes opciones, facilitándole un abanico de posibilidades de establecer una política a corto, medio y largo plazo acorde con sus recursos y necesidades reales.

El auditor deberá lógicamente abstenerse de recomendar actuaciones innecesariamente onerosas, dañinas o que generen riesgos injustificados para el auditado, e igualmente de proponer modificaciones carentes de base científica contrastada, insuficientemente probadas, o de imprevisible futuro.

Una de las cuestiones más controvertidas, respecto de la aplicación de este principio, es la referente a facilitar el derecho de las organizaciones auditadas a la libre elección del auditor, lo que implica el deber moral de evitar generar dependencias de los primeros respecto de los segundos, aunque dicho condicionante perjudique determinadas expectativas económicas de estos últimos.

Igualmente, si el auditado decidiera encomendar posteriores auditorías a otros profesionales, éstos deberían poder tener acceso a los informes de los trabajos anteriormente realizados sobre el sistema del auditado siempre y cuando con ello no se vulnerasen derechos de terceros protegidos con el secreto profesional que el auditor debe en todo momento guardar.

7.2.2. Principio de calidad

El auditor deberá prestar sus servicios a tenor de las posibilidades de la ciencia y medios a su alcance con absoluta libertad respecto a la utilización de dichos medios y en unas condiciones técnicas adecuadas para el idóneo cumplimiento de su labor.

En los casos en que la precariedad de medios puestos a su disposición impidan o dificulten seriamente la realización de la auditoría, deberá negarse a realizarla hasta que se le garantice un mínimo de condiciones técnicas que no comprometan la calidad de sus servicios o dictámenes.

Cuando durante la ejecución de la auditoría, el auditor considerase conveniente recabar el informe de otros técnicos más cualificados sobre algún aspecto o incidencia que superase su capacitación profesional para analizarlo en idóneas condiciones, deberá remitir el mismo a un especialista en la materia o recabar su dictamen para reforzar la calidad y fiabilidad global de la auditoría.

7.2.3. Principio de capacidad

El auditor debe estar plenamente capacitado para la realización de la auditoría encomendada, máxime teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, dada su especialización, a los auditados en algunos casos les puede ser extremadamente difícil verificar sus recomendaciones y evaluar correctamente la precisión de las mismas.

Hay que tener muy presente que el auditor, al igual que otros determinados profesionales (médicos, abogados, educadores, etc.), puede incidir en la toma de decisiones de la mayoría de sus clientes con un elevado grado de autonomía, dada la dificultad práctica de los mismos de contrastar su capacidad profesional y el desequilibrio de conocimientos técnicos existentes entre el auditor y los auditados.

Debe, por tanto, ser plenamente consciente del alcance de sus conocimientos y de su capacidad y aptitud para desarrollar la auditoría evitando que una sobreestimación personal pudiera provocar el incumplimiento parcial o total de la misma, aun en los casos en que dicho incumplimiento no pueda ser detectado por las personas que le contraten dadas sus carencias cognitivas técnicas al respecto.

Conviene indicar que en los casos de producirse, por el contrario, una subestimación de su capacidad profesional, esta circunstancia podría afectar negativamente en la confianza del auditado sobre el resultado final de la auditoría, dejándole una innecesaria impresión de inseguridad sobre las propuestas o decisiones a adoptar.

A efectos de garantizar, en la medida de lo posible, la pertinencia de sus conocimientos, el auditor deberá procurar que éstos evolucionen, al unísono con el desarrollo de las tecnologías de la información, en una forma dinámica, evitando una perniciosa estaticidad técnico-intelectual que, en este campo de la ciencia, origina una drástica reducción de las garantías de seguridad y una obsolescencia de métodos y técnicas que pueden inhabilitarle para el ejercicio de su profesión.

Conviene por último llamar la atención sobre la casuística de la acreditación de la capacitación de los auditores con la pregunta clásica, adaptada a las circunstancias de esta profesión, de ¿quién audita a los auditores?

Es deseable que se fortalezca la certificación profesional de la aptitud de los auditores para realizar unos trabajos de índole tan compleja.

Esta certificación que deberá tener un plazo de validez acorde con la evolución de las nuevas tecnologías de la información, debería estar avalada y garantizada por la metodología empleada para acreditar dicha especialización, la independencia de las entidades certificadoras, y la solvencia profesional, objetivamente contrastada, de los órganos, necesariamente colegiados, que en las mismas se creen con la finalidad de apreciar la formación y cualificación profesional de los solicitantes de la misma.

7.2.4. Principio de cautela

El auditor debe en todo momento ser consciente de que sus recomendaciones deben estar basadas en la experiencia contrastada que se le supone tiene adquirida, evitando que, por un exceso de vanidad, el auditado se embarque en proyectos de futuro fundamentados en simples intuiciones sobre la posible evolución de las nuevas tecnologías de la información.

Si bien es cierto que el auditor debe estar al corriente del desarrollo de dichas tecnologías de la información e informar al auditado de su previsible evolución, no es menos cierto que debe evitar la tentación de creer que, gracias a sus conocimientos, puede aventurar, con un casi absoluto grado de certeza, los futuros avances tecnológicos y transmitir, como medio de demostrar su cualificada especialización, dichas previsiones como hechos incontestables incitando al auditado a iniciar ilusorios e insuficientemente garantizados proyectos de futuro.

Debe, por tanto, el auditor actuar con un cierto grado de humildad, evitando dar la impresión de estar al corriente de una información privilegiada sobre el estado real de la evolución de los proyectos sobre nuevas tecnologías y ponderar las dudas que le surjan en el transcurso de la auditoría a fin de poner de manifiesto las diferentes

posibles líneas de actuación en función de previsiones reales y porcentajes de riesgo calculados de las mismas, debidamente fundamentadas.

7.2.5. Principio de comportamiento profesional

El auditor, tanto en sus relaciones con el auditado como con terceras personas, deberá, en todo momento, actuar conforme a las normas, implícitas o explícitas, de dignidad de la profesión y de corrección en el trato personal.

Para ello deberá cuidar la moderación en la exposición de sus juicios u opiniones evitando caer en exageraciones o atemorizaciones innecesarias procurando, en todo momento, transmitir una imagen de precisión y exactitud en sus comentarios que avalen su comportamiento profesional e infundan una mayor seguridad y confianza a sus clientes.

El comportamiento profesional exige del auditor una seguridad en sus conocimientos técnicos y una clara percepción de sus carencias, debiendo eludir las injerencias no solicitadas por él, de profesionales de otras áreas, en temas relacionados o que puedan incidir en el resultado de la auditoría y, cuando precisase del asesoramiento de otros expertos, acudir a ellos, dejando en dicho supuesto constancia de esa circunstancia y reflejando en forma diferenciada, en sus informes y dictámenes, las opiniones y conclusiones propias y las emitidas por los mismos.

El auditor debe asimismo guardar un escrupuloso respeto por la política empresarial del auditado, aunque ésta difiera ostensiblemente de las del resto del sector en las que desarrolla su actividad, evitar comentarios extemporáneos sobre la misma en tanto no estén relacionados o afecten al objeto de la auditoría y analizar pormenorizadamente las innovaciones concretas puestas en marcha por el auditado a fin de determinar sus específicas ventajas y riesgos, eludiendo evaluarlas únicamente a tenor de los estándares medios del resto de empresas de su sector.

Igualmente debe evitar realizar actos que simulen aplicaciones de tratamientos ficticios, encubran comportamientos no profesionales o den publicidad a metodologías propias o ajenas insuficientemente contrastadas y garantizadas.

7.2.6. Principio de concentración en el trabajo

En su línea de actuación, el auditor deberá evitar que un exceso de trabajo supere sus posibilidades de concentración y precisión en cada una de las tareas a él encomendadas, ya que la saturación y dispersión de trabajos suele a menudo, si no está

debidamente controlada, provocar la conclusión de los mismos sin las debidas garantías de seguridad.

A este efecto, el auditor deberá sopesar las posibles consecuencias de una acumulación excesiva de trabajos a fin de no asumir aquellos que objetivamente no tenga tiempo de realizar con las debidas garantías de calidad, debiendo rechazar o posponer los que en dichas circunstancias se le ofrezcan.

Asimismo deberá evitar la desaconsejable práctica de ahorro de esfuerzos basada en la reproducción de partes significativas de trabajos o conclusiones obtenidas de trabajos previos en otros posteriores elaborados como colofón de nuevas auditorías.

Por el contrario, sí es admisible el que, una vez analizados en profundidad los aspectos a tener en cuenta y obtenidas las correspondientes conclusiones, se contrasten las mismas a tenor de la experiencia adquirida y reflejada en anteriores informes, ya que este modo de actuar permite detectar posibles omisiones en el estudio, completar los trabajos sobre el objeto de la auditoría incompletamente ejecutados y cubrir las imprevisiones detectadas por medio de esta comparación.

Este comportamiento profesional permitirá al auditor dedicar a su cliente la mayor parte de los recursos posibles obtenidos de sus conocimientos y experiencias previas con una completa atención durante la ejecución de la auditoría sin injerencias o desatenciones originadas por prestaciones ajenas a la misma.

7.2.7. Principio de confianza

El auditor deberá facilitar e incrementar la confianza del auditado en base a una actuación de transparencia en su actividad profesional sin alardes científico-técnicos que, por su incomprensión, puedan restar credibilidad a los resultados obtenidos y a las directrices aconsejadas de actuación.

Este principio requiere asimismo, por parte del auditor, el mantener una confianza en las indicaciones del auditado aceptándolas sin reservas como válidas, a no ser que observe datos que las contradigan y previa confirmación personal de la inequívoca veracidad de los mismos.

Para fortalecer esa confianza mutua se requiere por ambas partes una disposición de diálogo sin ambigüedades que permita aclarar las dudas que, a lo largo de la auditoría, pudieran surgir sobre cualesquiera aspectos que pudieran resultar conflictivos, todo ello con la garantía del secreto profesional que debe regir en su relación.

El auditor deberá, en consonancia con esta forma de actuar, adecuar su lenguaje al nivel de comprensión del auditado, descendiendo y detallando cuanto haga falta en su explicación debiendo solicitar, cuando lo considere necesario, la presencia de alguno de los colaboradores de confianza de su cliente que pudiera apreciar determinados aspectos técnicos cuando precise informarle sobre cuestiones de una especial complejidad científica.

7.2.8. Principio de criterio propio

El auditor durante la ejecución de la auditoría deberá actuar con criterio propio y no permitir que éste esté subordinado al de otros profesionales, aun de reconocido prestigio, que no coincidan con el mismo.

En los casos en que aprecie divergencias de criterio con dichos profesionales sobre aspectos puntuales de su trabajo, deberá reflejar dichas divergencias dejando plenamente de manifiesto su propio criterio e indicando, cuando aquél esté sustentado en metodologías o experiencias que difieran de las corrientes profesionales mayoritariamente asumidas, dicha circunstancia.

La defensa a ultranza del propio criterio no es óbice para respetar las críticas adversas de terceros, aunque el auditor debe evitar que, si una vez analizadas continúa discrepando de las mismas, éstas puedan seguir influyendo en su trabajo, ya que la libertad de criterio impone al auditor la obligación ética de actuar en todo momento en la forma que él considere personalmente más beneficiosa para el auditado, aun cuando terceras personas le inciten a desarrollar líneas diferentes de actuación.

Este principio exige asimismo del auditor una actitud cuasibeligerante en los casos en que llegue al convencimiento de que la actividad que se le solicita, presuntamente para evaluar y mejorar un sistema informático, tiene otra finalidad ajena a la auditoría, en cuyo caso deberá negarse a prestar su asistencia poniendo de manifiesto el porqué de dicha negativa.

De igual forma cuando el auditor observe que, de forma reiterada, el auditado se niega, sin justificación alguna, a adoptar sus propuestas, deberá plantearse la continuidad de sus servicios en función de las razones y causas que considere puedan justificar dicho proceder.

7.2.9. Principio de discreción

El auditor deberá en todo momento mantener una cierta discreción en la divulgación de datos, aparentemente inocuos, que se le hayan puesto de manifiesto durante la ejecución de la auditoría.

Este cuidado deberá extremarse cuando la divulgación de dichos datos pudiera afectar a derechos relacionados con la intimidad o profesionalidad de las personas concernidas por los mismos o a intereses empresariales, y mantenerse tanto durante la realización de la auditoría como tras su finalización.

7.2.10. Principio de economía

El auditor deberá proteger, en la medida de sus conocimientos, los derechos económicos del auditado evitando generar gastos innecesarios en el ejercicio de su actividad.

En cumplimiento de este principio deberá procurar evitar dilaciones innecesarias en la realización de la auditoría. Esta economía de tiempos permitirá al auditado reducir los plazos de actuación tendentes a solventar los problemas detectados o a la adecuación a los nuevos métodos propuestos aportando un determinado valor añadido al trabajo del auditor.

De igual forma, el auditor deberá tener en cuenta la economía de medios materiales o humanos, eludiendo utilizar aquellos que no se precisen, lo que redundará en reducciones de gastos no justificados.

Conviene, en virtud de este principio, delimitar en la forma más concreta posible *ab initio* el alcance y límites de la auditoría a efectos de evitar tener que realizar estudios sobre aspectos colaterales no significativos, que detraen tiempo y medios para su análisis, y emitir informes sobre temas circunstanciales o ajenos a la finalidad perseguida.

El auditor deberá rechazar las ampliaciones del trabajo en marcha, aun a petición del auditado, sobre asuntos no directamente relacionados con la auditoría, dejando que de ellos se encarguen los profesionales *ad hoc*, y evitará entrar en discusiones, comentarios, visitas de cortesías, etc. que no estén justificadas con la ejecución de la misma.

En las recomendaciones y conclusiones realizadas en base a su trabajo deberá asimismo eludir, incitar o proponer actuaciones que puedan generar gastos innecesarios o desproporcionados.

7.2.11. Principio de formación continuada

Este principio, íntimamente ligado al principio de capacidad y vinculado a la continua evolución de las tecnologías de la información y las metodologías relacionadas con las mismas, impone a los auditores el deber y la responsabilidad de

mantener una permanente actualización de sus conocimientos y métodos a fin de adecuarlos a las necesidades de la demanda y a las exigencias de la competencia de la oferta.

La progresiva especialización de sus clientes exige asimismo de los auditores, para poder mantener el grado de confianza que se precisa para dejar en sus manos el análisis de las prestaciones de los sistemas informáticos, un continuo plan de formación personal que implique un seguimiento del desarrollo y oportunidades de las nuevas tecnologías de la información para poder incorporar dichas innovaciones, una vez consolidadas, a los sistemas de sus clientes, evitando de esta forma su obsolescencia.

7.2.12. Principio de fortalecimiento y respeto de la profesión

La defensa de los auditados pasa por el fortalecimiento de la profesión de los auditores informáticos, lo que exige un respeto por el ejercicio, globalmente considerado, de la actividad desarrollada por los mismos y un comportamiento acorde con los requisitos exigibles para el idóneo cumplimiento de la finalidad de las auditorías.

En consonancia con el principio de defensa de la profesión de los auditores, éstos deberán cuidar del reconocimiento del valor de su trabajo y de la correcta valoración de la importancia de los resultados obtenidos con el mismo.

En cuanto a la remuneración por su actividad profesional ésta debería estar acorde con la preparación del auditor y con el valor añadido que aporta al auditado con su trabajo, siendo rechazable el establecimiento de acuerdos que impliquen remuneraciones al auditor manifiestamente desproporcionadas tanto por insuficientes como por abusivas, ya que a largo plazo, tanto las unas como las otras redundan en un debilitamiento del reconocimiento y aprecio de la profesión.

El auditor deberá, por tanto, en prestigio de su profesión, evitar competir deslealmente con sus compañeros rebajando sus precios a límites impropios del trabajo a realizar con la finalidad de eliminar competidores y reducir la competencia profesional, e igualmente evitar abusar de su especialización para imponer una remuneración como contrapartida a su actividad profesional que manifiestamente exceda del valor objetivo de su trabajo.

Como integrante de un grupo profesional, deberá promover el respeto mutuo y la no confrontación entre compañeros. Este respeto no está reñido, sin embargo, con la denuncia de comportamientos indebidos, parasitarios o dolosos en los casos en que éstos le hayan quedado patentes, ya que estas denuncias deben contemplarse en el marco de la defensa de la propia profesión como forma de elevar su reconocimiento.

En sus relaciones profesionales deberá exigir asimismo una reciprocidad en el comportamiento ético de sus colegas y facilitar las relaciones de confraternidad y mutuo apoyo cuando así se lo soliciten. Este mutuo apoyo no debe entenderse en ningún caso como contraprestación gratuita de asesoramiento, sino como cauce de colaboración en temas puntuales que precisen de una cierta especialización o contrastación de opiniones.

7.2.13. Principio de independencia

Este principio, muy relacionado con el principio de criterio propio, obliga al auditor, tanto si actúa como profesional externo o con dependencia laboral respecto a la empresa en la que deba realizar la auditoría informática, a exigir una total autonomía e independencia en su trabajo, condición ésta imprescindible para permitirle actuar libremente según su leal saber y entender.

La independencia del auditor constituye, en su esencia, la garantía de que los intereses del auditado serán asumidos con objetividad; en consecuencia el correcto ejercicio profesional de los auditores es antagónico con la realización de su actividad bajo cualesquiera condiciones que no permitan garantizarla.

Esta independencia implica asimismo el rechazo de criterios con los que no esté plenamente de acuerdo, debiendo reflejar en su informe final tan sólo aquellos que considere pertinentes, evitando incluir en el mismo aquellos otros con los que disienta aunque sea impelido a ello.

El auditor igualmente deberá preservar su derecho y obligación de decir y poner de manifiesto todo aquello que según su ciencia y conciencia considere necesario, y abstenerse de adoptar métodos o recomendar líneas de actuación que, según su entender, pudieran producir perjuicios al auditado, aunque éste así se lo solicite.

A efectos de salvaguardar su independencia funcional, deberá eludir establecer dependencias con firmas que la limiten a fin de evitar que, aun subjetivamente, pueda producirse una reducción de su libertad de actuación profesional.

Conviene, sin embargo, diferenciar esta independencia en su trabajo de la exigencia de utilizar el resultado del mismo, lo que obviamente entra en el campo competencial de la potestad de actuación del auditado, el cual puede seguir o ignorar, por las razones que estime convenientes, sus informes, recomendaciones, orientaciones o consejos sin que ello suponga merma alguna en la independencia del auditor.

7.2.14. Principio de información suficiente

Este principio de primordial interés para el auditado, obliga al auditor a ser plenamente consciente de su obligación de aportar, en forma pormenorizadamente clara, precisa e inteligible para el auditado, información tanto sobre todos y cada uno de los puntos relacionados con la auditoría que puedan tener algún interés para él como sobre las conclusiones a las que ha llegado, e igualmente informarle sobre la actividad desarrollada durante la misma que ha servido de base para llegar a dichas conclusiones.

Dicha información deberá estar constituida por aquella que el auditor considere conveniente o beneficiosa para los intereses o seguridad de su cliente y estar en consonancia con la utilidad que pueda tener, en el presente o en el futuro, para el mismo. Junto a dicha información deberá asimismo facilitar cualquier otra que le sea requerida por el auditado, aunque la considere intrascendente o poco significativa, siempre y cuando ésta tenga una relación directa y no meramente circunstancial con el objeto de la auditoría y no afecte a datos nominativos cuyo deber de secreto le sea exigible.

En dichas informaciones deberá evitar aportar datos intrascendentes para su cliente (datos que sólo afecten a su propia imagen comercial o profesional del auditor –autopropaganda–, datos comerciales no pertinentes, etc.), que sólo persigan incrementar el volumen del informe o justificar la ausencia de determinadas precisiones de singular importancia mediante la aportación de otras de menor interés y de más fácil elaboración para el auditor.

El auditor deberá asimismo comprometerse con sus conclusiones, debiendo indicar en ellas los defectos observados en el sistema informático, las líneas de actuación que recomienda y las dudas que respecto a las mismas se le plantean, indicando en este último caso si la causa excepcional que las produce se deriva de una insuficiencia de datos sobre el propio sistema, de una falta de conocimientos técnicos del propio auditor que le impide decidirse, con una mínima garantía de fiabilidad, sobre la conveniencia de inclinarse preferentemente por alguna de ellas, o de una incertidumbre sobre posibles evoluciones a medio o largo plazo de los avances tecnológicos.

Ciertamente el auditor debe ser consciente de que la explicitación de sus dudas afectará a la confianza del auditado, pero en cualquier caso es preferible transmitir una información veraz, entendida ésta como la que es exigible a todo buen profesional en el ejercicio de su actividad a tenor de sus conocimientos, que transmitir, como opinión experta, una información de la que no pueda garantizar personalmente su exactitud.

Es importante asimismo que la información transmitida al auditado ponga de manifiesto una prudencia y sentido de la responsabilidad, características estas que nunca deben estar reñidas con los principios de suficiencia informativa y de veracidad, evitando recrear los aspectos negativos o los errores humanos detectados que deben quedar reflejados con un cierto tacto profesional.

El auditor debe evitar hacer recaer la totalidad de inadaptaciones del sistema sobre algunos elementos singulares (personales o materiales), ignorando aquellos otros que pudieran tener incidencia en los fallos o anomalías detectadas, por simple comodidad en la elaboración de sus informes, y huir del secretismo en cuanto a la explicitación de los métodos utilizados siendo inadmisibles que se aproveche para ello de la buena fe del auditado.

La labor informativa del auditor deberá, por tanto, estar basada en la suficiencia, autonomía y máximo aprovechamiento de la misma por parte de su cliente, debiendo indicar junto a sus juicios de valor, la metodología que le ha llevado a establecerlos para, de esta forma, facilitar el que, en futuras auditorías, puedan aprovecharse los conocimientos extraídos de la así realizada, eludiendo monopolios fácticos y dependencias generadas por oscurantismo en la transmisión de la información.

7.2.15. Principio de integridad moral

Este principio, inherentemente ligado a la dignidad de persona, obliga al auditor a ser honesto, leal y diligente en el desempeño de su misión, a ajustarse a las normas morales, de justicia y probidad, y a evitar participar, voluntaria o inconscientemente, en cualesquiera actos de corrupción personal o de terceras personas.

El auditor no deberá, bajo ninguna circunstancia, aprovechar los conocimientos adquiridos durante la auditoría para utilizarlos en contra del auditado o de terceras personas relacionadas con el mismo.

Durante la realización de la auditoría, el auditor deberá emplear la máxima diligencia, dedicación y precisión, utilizando para ello todo su saber y entender.

7.2.16. Principio de legalidad

En todo momento el auditor deberá evitar utilizar sus conocimientos para facilitar, a los auditados o a terceras personas, la contravención de la legalidad vigente.

En ningún caso consentirá ni colaborará en la desactivación o eliminación de dispositivos de seguridad ni intentará obtener los códigos o claves de acceso a sectores restringidos de información generados para proteger los derechos, obligaciones o intereses de terceros (derecho a la intimidad, secreto profesional, propiedad intelectual, etc.).

De igual forma los auditores deberán abstenerse de intervenir líneas de comunicación o controlar actividades que puedan generar vulneración de derechos personales o empresariales dignos de protección.

La primacía de esta obligación exige del auditor un comportamiento activo de oposición a todo intento, por parte del auditado o de terceras personas, tendente a infringir cualquier precepto integrado en el derecho positivo.

7.2.17. Principio de libre competencia

La actual economía de mercado exige que el ejercicio de la profesión se realice en el marco de la libre competencia, siendo rechazables, por tanto, las prácticas colusorias tendentes a impedir o limitar la legítima competencia de otros profesionales y las prácticas abusivas consistentes en el aprovechamiento en beneficio propio, y en contra de los intereses de los auditados, de posiciones predominantes.

En la comercialización de los servicios de auditoría informática deben evitarse tanto los comportamientos parasitarios como los meramente desleales, entendidos los primeros como aprovechamientos indebidos del trabajo y reputación de otros en beneficio propio, y los segundos como intentos de confundir a los demandantes de dichos servicios mediante ambigüedades, insinuaciones o pautalizaciones que sólo tengan por objetivo enmascarar la calidad y fiabilidad de la oferta.

7.2.18. Principio de no discriminación

El auditor en su actuación previa, durante y posterior a la auditoría, deberá evitar inducir, participar o aceptar situaciones discriminatorias de ningún tipo, debiendo ejercer su actividad profesional sin prejuicios de ninguna clase y con independencia de las características personales, sociales o económicas de sus clientes.

Deberá evitar cualquier tipo de condicionantes personalizados y actuar en todos los casos con similar diligencia con independencia de los beneficios obtenidos del auditado, de las simpatías personales que tenga hacia éste o de cualquier otra circunstancia.

Su actuación deberá asimismo mantener una igualdad de trato profesional con la totalidad de personas con las que en virtud de su trabajo tenga que relacionarse con independencia de categoría, estatus empresarial o profesional, etc.

7.2.19. Principio de no injerencia

El auditor, dada la incidencia que puede derivarse de su tarea, deberá evitar injerencias en los trabajos de otros profesionales, respetar su labor y eludir hacer comentarios que pudieran interpretarse como despreciativos de la misma o provocar un cierto desprestigio de su cualificación profesional, a no ser que, por necesidades de la auditoría, tuviera que explicitar determinadas inidoneidades que pudieran afectar a las conclusiones o el resultado de su dictamen.

Deberá igualmente evitar aprovechar los datos obtenidos de la auditoría para entrar en competencia desleal con profesionales relacionados con ella de otras áreas del conocimiento. Esa injerencia es mayormente reprochable en los casos en los que se incide en aquellos campos de actividad para los que el auditor no se encuentre plenamente capacitado.

7.2.20. Principio de precisión

Este principio estrechamente relacionado con el principio de calidad exige del auditor la no conclusión de su trabajo hasta estar convencido, en la medida de lo posible, de la viabilidad de sus propuestas, debiendo ampliar el estudio del sistema informático cuanto considere necesario, sin agobios de plazos (con la excepción de lo ya indicado anteriormente respecto al principio de economía) siempre que se cuente con la aquiescencia del auditado, hasta obtener dicho convencimiento.

En la exposición de sus conclusiones deberá ser suficientemente crítico, no eludiendo poner de manifiesto aquellos aspectos concretos que considere puedan tener una cierta incidencia en la calidad y fiabilidad de la auditoría, ni quedándose en generalidades o indefiniciones que por su amplitud o ambigüedad sólo pretendan cubrir al auditor de los riesgos derivados de toda concreción en detrimento de los derechos e intereses del auditado.

Es exigible asimismo del auditor que indique como evaluado únicamente aquello que directamente, o por medio de sus colaboradores, haya comprobado u observado de forma exhaustiva, eludiendo indicar como propias y contrastadas las observaciones parciales o incompletas o las recabadas de terceras personas.

7.2.21. Principio de publicidad adecuada

La oferta y promoción de los servicios de auditoría deberán en todo momento ajustarse a las características, condiciones y finalidad perseguidas, siendo contraria a

la ética profesional la difusión de publicidad falsa o engañosa que tenga como objetivo confundir a los potenciales usuarios de dichos servicios.

La defensa del prestigio de la profesión obliga asimismo a los auditores informáticos a evitar las campañas publicitarias que, por su contenido, puedan desvirtuar la realidad de sus servicios, enmascaren los límites de los mismos, oscurezcan sus objetivos o prometan resultados de imprevisible, cuando no imposible, consecución.

7.2.22. Principio de responsabilidad

El auditor deberá, como elemento intrínseco de todo comportamiento profesional, responsabilizarse de lo que haga, diga o aconseje, sirviendo esta forma de actuar como cortapisa de inferencias extraprofesionales.

Si bien este principio aparentemente puede resultar especialmente gravoso en auditorías de gran complejidad, que por otra parte son las habitualmente encomendadas a los auditores informáticos, es preciso tenerlo presente a fin de poder garantizar su responsabilidad en los casos en que, debido a errores humanos durante la ejecución de la auditoría, se produzcan daños a su cliente que le pudieran ser imputados.

Por ello es conveniente impulsar la formalización y suscripción de seguros, adaptados a las peculiares características de su actividad, que cubran la responsabilidad civil de los auditores con una suficiente cobertura a fin de acrecentar la confianza y solvencia de su actuación profesional.

Obviamente las compañías aseguradoras podrán introducir determinados módulos correctores del coste de suscripción de las correspondientes pólizas a tenor de las garantías que los auditores puedan aportar (certificaciones profesionales, años de experiencia, etc.), lo que avalaría una más racional estructuración de la oferta.

La responsabilidad del auditor conlleva la obligación de resarcimiento de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de una actuación negligente o culposa, si bien debería probarse la conexión causa-efecto originaria del daño, siendo aconsejable estipular *a priori* un tope máximo de responsabilidad sobre los posibles daños acorde con la remuneración acordada como contraprestación por la realización de la auditoría.

7.2.23. Principio de secreto profesional

La confidencia y la confianza son características esenciales de las relaciones entre el auditor y el auditado e imponen al primero la obligación de guardar en secreto la

hechos e informaciones que conozca en el ejercicio de su actividad profesional. Solamente por imperativo legal podrá decaer esa obligación.

Este principio, inherente al ejercicio de la profesión del auditor, estipulado en beneficio de la seguridad del auditado, obliga al primero a no difundir a terceras personas ningún dato que haya visto, oído, o deducido durante el desarrollo de su trabajo que pudiera perjudicar a su cliente, siendo nulos cualesquiera pactos contractuales que pretendieran excluir dicha obligación.

El mantenimiento del secreto profesional sobre la información obtenida durante la auditoría se extiende a aquellas personas que, bajo la potestad organizadora del auditor, colaboren con él en cualesquiera de las actividades relacionadas con la misma.

Si se produjese una dejación, por parte de las personas que dependen del auditor, de la obligación de mantener secreto sobre los datos obtenidos de la auditoría, recaerá sobre ellos la correspondiente obligación de resarcimiento por los daños materiales o morales causados como consecuencia de la misma, obligación que compartirán solidariamente con el auditor en virtud de la responsabilidad *in eligendo* o *in vigilando* que éste asume por los actos de sus colaboradores.

Este deber de secreto impone asimismo al auditor el establecimiento de las medidas y mecanismos de seguridad pertinentes para garantizar al auditado que la información documentada, obtenida a lo largo de la auditoría, va a quedar almacenada en entornos o soportes que impidan la accesibilidad a la misma por terceras personas no autorizadas. El auditor tan sólo deberá permitir el acceso y conocimiento de la misma a los profesionales que, bajo su dependencia organizativa, estén igualmente sujetos al deber de mantener el secreto profesional y en la medida en que, por las necesidades de información de los mismos, sea preciso.

No debe considerarse, por el contrario, como vulneración del secreto profesional, la transmisión de datos confidenciales del auditado a otros profesionales cuando esta circunstancia se origine por expresa petición del mismo; la conservación de los informes durante un plazo prudencial, siempre y cuando se cuente con las medidas de seguridad adecuadas; la difusión, con una finalidad científica, o meramente divulgativa, de los problemas detectados en la auditoría y las soluciones a los mismos si previamente se disgregan los datos de forma tal que no puedan asociarse en ningún caso los mismos a personas o empresas determinadas; ni, por último, la revelación del secreto por imperativo legal siguiendo los cauces correspondientes, debiéndose, aun así, mantener al máximo la cautela que impone dicho levantamiento del secreto.

En los casos en que el auditor actúe por cuenta ajena en el marco contractual establecido con la empresa por medio de la cual presta sus servicios al auditado, la transmisión de la información recogida durante la auditoría a su empresa deberá

circunscribirse únicamente a los datos administrativos reguladores de su actividad (precio de la auditoría, gastos generados, tiempo empleado, medios de la empresa utilizados, etc.), excluyendo de dicha información los datos técnicos observados en el sistema informático o los relacionados con cualesquiera otros aspectos, a no ser que el auditado consienta fehacientemente en que dichos datos sean entregados a los responsables de la empresa que, en este caso, quedarán a su vez obligados a mantener el secreto profesional sobre los mismos.

7.2.24. Principio de servicio público

La aplicación de este principio debe incitar al auditor a hacer lo que esté en su mano y sin perjuicio de los intereses de su cliente, para evitar daños sociales como los que pueden producirse en los casos en que, durante la ejecución de la auditoría, descubra elementos de *software* dañinos (virus informáticos) que puedan propagarse a otros sistemas informáticos diferentes del auditado. En estos supuestos el auditor deberá advertir, necesariamente en forma genérica, sobre la existencia de dichos virus a fin de que se adopten las medidas sociales informativas pertinentes para su prevención, pero deberá asimismo cuidar escrupulosamente no dar indicios que permitan descubrir la procedencia de su información.

El auditor deberá asimismo tener presente la ponderación entre sus criterios éticos personales y los criterios éticos subyacentes en la sociedad en la que presta sus servicios, debiendo poner de manifiesto sus opciones personales cuando entren en contradicción con la ética social que el auditado pueda presumir que está implícitamente aceptada por el auditor.

Este principio de adaptabilidad u oposición constructiva tanto a los principios éticos sociales, asumidos como válidos por la comunidad, como a las costumbres dimanantes de los mismos, facilita la necesaria y permanente crítica social sobre dichos principios y costumbres, permitiendo su adaptación a las nuevas necesidades y perspectivas abiertas con el progreso tecnológico regional o mundial.

La consideración del ejercicio profesional de los auditores como servicio público globalmente considerado, exige igualmente una continua elevación del arte de la ciencia en el campo de la auditoría informática, lo que únicamente puede lograrse con la participación activa de los profesionales de dicho sector en la definición de las características y exigencias de su actividad profesional y, por ende, en la elaboración de los códigos deontológicos reguladores del ejercicio responsable de dicha actividad.

7.2.25. Principio de veracidad

El auditor en sus comunicaciones con el auditado deberá tener siempre presente la obligación de asegurar la veracidad de sus manifestaciones con los límites impuestos por los deberes de respeto, corrección y secreto profesional.

El principio de veracidad no debe, sin embargo, considerarse como constreñido a expresar únicamente aquello sobre lo que se tenga una absoluta y total certeza, sino que implica, con el grado de subjetividad que esto conlleva, poner de manifiesto aquello que, a tenor de sus conocimientos y de lo considerado como "buena práctica profesional", tenga el suficiente grado de fiabilidad como para ser considerado comúnmente como veraz mientras no se aporten datos o pruebas que demuestren lo contrario.

Es conveniente tener presentes los criterios expuestos por nuestro Tribunal Constitucional al respecto, generalmente asociado con la actividad de los profesionales de la comunicación, que indican que la obligación de veracidad impone un específico deber de diligencia que se puede y debe exigir al profesional en la transmisión de la información sobre hechos que deben haber sido necesariamente contrastados con datos objetivos, excluyendo por tanto de dicha calificación de veracidad a aquella información basada en "conductas negligentes" del profesional y aún más a aquella otra proveniente "de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas", considerando como admisible y presuntamente veraz "la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible" (STC de 21 de enero de 1988), ya que, como la citada sentencia indica, "las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad como condición para reconocimiento del derecho protegido por el artículo 20.1.d) de la Constitución (a comunicar y recibir información veraz) la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio".

Los criterios del Tribunal Constitucional sobre el alcance de la obligación de veracidad han sido reiterados asimismo en sucesivas sentencias en las que se expresa que "información veraz, en el sentido del artículo 20.1.d) significa información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras insidias", y que "una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta y otra muy distinta es emitir expresiones, afirmaciones o calificativos claramente vejatorios desvinculados de esa información, y que resultan proferidos, gratuitamente, sin justificación alguna" (STC 105/1990 de 6 de junio); que el derecho a la información "no puede restringirse a la comunicación objetiva y aséptica de los hechos, sino que incluye también la investigación de la causación de hechos, la valoración probabilística de estas hipótesis y la formulación de conjeturas sobre esa posible causación" (STC 171/1990 de 12 de noviembre); que "la descripción de hechos y opiniones que ordinariamente se produce en las informaciones determina que la veracidad despliegue sus efectos legitimadores

en relación con los hechos, pero no respecto de las opiniones que los acompañen o valoraciones que de los mismos se hagan, puesto que las opiniones, creencias personales o juicios de valor no son susceptibles de verificación, y ello determina que el ámbito de protección del derecho de información quede delimitado, respecto de esos elementos valorativos, por la ausencia de expresiones injuriosas que resulten innecesarias para el juicio crítico" (STC 172/1990 de 12 de noviembre); y que "la regla constitucional de la veracidad de la información no va dirigida tanto a la exigencia de la total exactitud en la información cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente o irresponsable" (STC 40/1992 de 30 de marzo).

Así pues, la aplicación de este principio exige que el auditor, en el marco de su obligación de informar al auditado sobre el trabajo realizado, comunique a este último sus conclusiones, diferenciando los hechos constatados de las opiniones, propuestas y valoraciones personales, debiendo actuar en la comprobación de los primeros y en la fundamentación de las restantes con una suficiente diligencia profesional para garantizar el cumplimiento de su obligación de informar verazmente.

7.3. CONCLUSIONES

El auditor informático debe ser plenamente consciente de que su comportamiento profesional presenta dos facetas, íntimamente ligadas, que configuran el régimen de su responsabilidad frente a terceros.

La primera corresponde a la aplicación de sus conocimientos técnicos con la finalidad de determinar, en base a los mismos, las condiciones de seguridad, fiabilidad y calidad de los medios, elementos o productos que conforman el sistema informático auditado y recomendar las medidas que estime convenientes para su mejora o adaptación a los objetivos para los que ha sido diseñado o que, a tenor de la coyuntura actual y previsible a medio plazo, constituyan sus perspectivas de futuro.

La segunda debe poner de manifiesto la aplicación de los fundamentos humanísticos que como persona y como profesional le son éticamente exigibles para, en función de los mismos, coadyuvar al desarrollo integral de la sociedad en la prestación de sus servicios y de la cual ha tomado, para la formación de sus conocimientos y desarrollo de su propia personalidad, las ideas integradas en el patrimonio cultural común aportado por sus antecesores.

Es, por tanto, inexcusable tener presente dicha dualidad de facetas a efectos de no ignorar ninguna de ellas so pretexto de que condicionamientos contractuales, jurídicos, sociales o morales, le obliguen a excluir de su comportamiento profesional alguna de

ellas debiendo tener siempre presente, que si bien la aplicación de sus conocimientos técnicos ayuda al desarrollo tecnológico de la sociedad, la aplicación de sus fundamentos humanísticos ayuda a la configuración de la conciencia moral de la misma, sirviendo como elemento de formación de los usos y costumbres que constituyen una de las fuentes del derecho regulador de la convivencia entre las personas que la integran.

En los casos de producirse algún conflicto entre ambas facetas, la ponderación de los derechos en juego deberá dar primacía a los valores morales sobre los materiales, ya que el fundamento íntimo de las personas descansa en los primeros como manifestación de su propio *ítem vital*, y que asimismo su transposición al entorno social debe imponer su prevalencia sobre los segundos, evitando que el desarrollo tecnológico pueda desvirtuar el desarrollo social que es, en suma, el máximo exponente del grado de evolución de la humanidad.

Como colofón a esos planteamientos cabe reflejar, como ejemplos representativos de la Normalización y aplicación de códigos de deontología profesional, el "Código de ética profesional" de la ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation) para orientar la conducta de los auditores informáticos miembros de dicha asociación, y el "Código de Conducta" de The British Computer Society, que establece los estándares profesionales de competencia, conducta y ética de la práctica informática en el Reino Unido.

La ISACF propone el siguiente Código de Ética Profesional para orientar a la conducta profesional, personal de los miembros de la Information Systems Audit and Control Association y/o de los poseedores del Certified Information Systems Auditor (CISA).

"Los Auditores Certificados de Sistemas de Información deberán:

1. Apoyar el establecimiento y cumplimiento de normas, procedimientos y controles de las auditorías de sistemas de información.
2. Cumplir con las Normas de Auditoría de Sistemas de Información, según las adopte la Information Systems Audit and Control Foundation.
3. Actuar en interés de sus empleadores, accionistas, clientes y público en general en forma diligente, leal y honesta, y no contribuir a sabiendas en actividades ilícitas o incorrectas.

4. Mantener la confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus deberes. La información no deberá ser utilizada en beneficio propio ni divulgada a terceros no legitimados.
5. Cumplir con sus deberes en forma independiente y objetiva y evitar toda actividad que comprometa o parezca comprometer su independencia.
6. Mantener su capacidad en los campos relacionados con la auditoría y los sistemas de información mediante la participación en actividades de capacitación profesional.
7. Ejercer sumo cuidado al obtener y documentar material suficiente sobre el cual basar sus conclusiones y recomendaciones.
8. Informar a las partes involucradas del resultado de las tareas de auditoría que se hayan realizado.
9. Apoyar la entrega de conocimientos a la gerencia, clientes y al público en general para mejorar su comprensión de la auditoría y los sistemas de información.
10. Mantener altos estándares de conducta y carácter tanto en las actividades profesionales como en las privadas.”

The British Computer Society por su parte establece un Código de Conducta cuyos principios se esquematizan a continuación.

1. Conducta Profesional: La conducta de los miembros de la Asociación mantendrá la dignidad, reputación y alta evaluación social de la profesión.
2. Integridad profesional: Ningún miembro intentará, en forma desleal, realizar actos en detrimento de la reputación, interés o perspectivas de otros miembros, y actuará, en todo momento, en forma íntegra con la Asociación, sus miembros y los miembros de otras profesiones con los que pueda relacionarse en su ejercicio profesional.
3. Interés Público: Todo miembro en cumplimiento y/o exoneración de su responsabilidad para con sus empleadores o clientes cuidará adecuadamente los intereses públicos y los derechos de terceras personas y, en particular, se asegurará de que los derechos de propiedad intelectual de terceros no se vean perjudicados por sus actos.